

Santiago, siete de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que los abogados don Fernando Aljaro García y don Manuel Guerra Castillo, en representación de don Luis Alberto Viveros Viveros, actualmente fallecido, demandante en autos sobre cumplimiento de sentencia laboral, RIT C-5916-2023, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, deducen recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz y señora Elsa Barrientos Guerrero y fiscal judicial señora Macarena Troncoso López, quienes con fecha 8 de enero de 2024, revocaron la sentencia de primer grado y, en su lugar, declararon que se acoge parcialmente la excepción de pago opuesta por la demandada CAM Servicios de Telecomunicaciones Ltda., hasta por la suma de \$16.186.308.

Refieren que la judicatura recurrida incurrió en falta o abuso al infringir lo dispuesto en los incisos quinto a séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, que regulan la sanción de la nulidad del despido, sus efectos y los presupuestos de su convalidación, al extender esta última institución a una hipótesis que no prevé, como es, el fallecimiento del trabajador.

Señalan que se dedujo una demanda por despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de prestaciones laborales, conocida por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT O-3502-2020, acogida por sentencia de 4 de octubre de 2021, que declaró injustificado y nulo el despido de 31 de enero de 2020, por lo que condenó al pago de las prestaciones que indica, incluidas las remuneraciones y cotizaciones de seguridad social devengadas entre el despido y su convalidación.

Con fecha 22 de agosto de 2023, una vez ejecutoriada la sentencia, la demandada dio cuenta del pago de \$16.187.308, haciendo presente que constando en autos el fallecimiento del trabajador demandante ocurrido el 30 de mayo de 2021, lo consignado solucionaba la totalidad de las prestaciones ordenadas pagar, incluidas las remuneraciones correspondientes a la nulidad del despido, calculadas hasta la fecha de defunción. Atendido el pago, se ordenó liquidar la deuda, diligencia cumplida el 15 de septiembre de 2023, que arrojó un monto de \$30.402.134, que, al no haberse convalidado el despido, consideró las remuneraciones adeudadas hasta esa fecha, más intereses, y previo descuento de los \$16.187.308 pagados en la causa; dicha liquidación fue objetada por la



demandada, quien sostuvo que no pueden devengarse créditos luego del fallecimiento del trabajador, argumento que fue rechazado, por estimarse que, en el caso, se decidió que la relación laboral entre las partes concluyó por despido de 31 de enero de 2020, fundado en la causal prevista en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo y, en consecuencia, la muerte del trabajador no puede ser invocada para efectos de fijar una eventual segunda fecha de término de la relación laboral en mérito de otra causal. Resuelto lo anterior, se remitió la causa al tribunal de cobranza, iniciándose los autos RIT C-5916-2023.

El 5 de enero de 2024, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago requirió a la demandada el pago de \$32.036.042, más reajustes, intereses y costas, lo que comprende la deuda liquidada en la causa primitiva -que ya había descontado lo consignado por la demandada- y sus respectivos reajustes e intereses. A continuación, por resolución de 9 de enero de 2024, declaró “Que de la revisión de los antecedentes a que este tribunal tiene acceso vía interconexión, en especial, lo informado por la parte demandante con fecha 15 de junio de 2021 en cuanto al fallecimiento del ejecutante don Luis Viveros Viveros, lo que se tuvo presente por el tribunal declarativo en resolución dictada en la misma fecha, cabe sostener en la especie, que atendida dicha circunstancia, la ficción legal señalada en el artículo 162 del Código del Trabajo, se ha visto superada por la realidad, siendo un hecho que repercute directamente con el devengo de la obligación objeto de la presente ejecución, y teniendo en cuenta, asimismo, el imperativo de hacer conciliar tanto el espíritu protector que favorece al trabajador como también la consideración y el respeto de otros aspectos fundamentales como es la necesidad de certeza, resguardar el principio de buena fe y evitar un eventual enriquecimiento ilícito, factores que se deben tener presente en todo orden jurisdiccional y que conducen, en la especie, a concluir que es procedente poner un límite al cobro de las remuneraciones post despido en estos autos, fijándose al efecto el 15 de septiembre de 2023, atendido que en dicha fecha se practicó liquidación de crédito en sede declarativa, en donde se establece la deuda total actualizada a dicha fecha”, con lo que estableció un límite a la sanción de la nulidad del despido, desestimando la posterior reposición.

La demandada objetó la liquidación y opuso excepción de pago, en relación al monto y los argumentos ya esgrimidos; el 23 de enero de 2024, se rechazó la excepción, en razón de no haberse acreditado el pago de las sumas consignadas en la liquidación practicada en sede declarativa; decisión que apelada fue



revocada por el fallo impugnado mediante el presente recurso, por considerar “Que si bien podrían efectuarse diversas disquisiciones sobre el punto, lo cierto es que cuando se configura la hipótesis de nulidad del despido la ley señala de manera expresa en la parte final del inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo que “éste -el despido- no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo” y esta expresión sólo cobra sentido para explicar el efecto que se sigue, cual es que la remuneración del trabajador sigue devengándose hasta que el despido no sea convalidado. No obstante lo anterior, resulta difícil sostener que la relación laboral continúa vigente, pues el trabajador no tiene ninguna obligación para con el empleador y, en rigor, la expresión utilizada sólo quiere significar que únicamente este último continúa obligado a pagar la remuneración al trabajador. En razón de lo anterior, cuando se produce el fallecimiento del destinatario de ese pago evidentemente la obligación se extingue y cualquier pago posterior carece de causa. Es por ello que ninguna justificación tiene lo decidido en la resolución de 9 de enero de 2024, que fijó, sin razón suficiente alguna, el 15 de septiembre de 2023 como fecha límite para el devengo de la remuneración, atendido que en dicha fecha se practicó liquidación de crédito en sede declarativa, en donde se establece la deuda total actualizada a dicha fecha”. Con lo que, estiman, se infringe la norma señalada y se contraviene lo resuelto en la sentencia ejecutoriada que aplicó la sanción en discusión.

Solicitan se acoja el recurso, se invalide la resolución impugnada, y se dicte en su reemplazo una que confirme la impugnada por la vía de la apelación que rechazó la excepción de pago.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente dictaron la resolución cuestionada, cuyas razones quedaron consignadas en la resolución que se impugna por este medio extraordinario, a la que se remiten.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, denominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su párrafo primero, intitulado de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.



Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los miembros de la judicatura recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, como puede advertirse, la judicatura recurrida para revocar la resolución apelada, analizó la norma en cuestión, a la luz de sus fines, así como de los principios generales del derecho, razonamiento del que se desprende que para decidir como se hizo se tuvo en consideración que siendo la nulidad del despido una institución destinada a garantizar el derecho del trabajador a acceder a prestaciones de seguridad social y, en particular, a la jubilación, su fallecimiento la priva de objeto, y, en consecuencia, extingue las obligaciones derivadas de la nulidad del despido, por lo que cualquier pago posterior carece de causa.

Sexto: Que, al respecto, cabe señalar que, como ha dicho reiteradamente este tribunal, el proceso de interpretación de la ley que lleva a cabo la judicatura en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de aquellos, salvo que se constate una violación evidente y manifiesta en dicha actividad, que por su entidad y arbitrariedad, configure una falta o abuso que deba ser enmendada, cuestión que, en la especie, no concurre, por cuanto se limitaron a argumentar, arribando a conclusiones jurídicas que se enmarcan dentro de los criterios de racionalidad propios del ejercicio de la jurisdicción, por lo que el presente arbitrio, constituye, en definitiva, una mera expresión de la disconformidad con lo decidido, que, como se ha dicho, no es controlable por esta vía.

Séptimo: Que, en ese contexto, y atendida la jurisprudencia de esta Corte referida al recurso de queja, se debe concluir que la magistratura recurrida no incurrió en falta o abuso grave susceptible de ser enmendada por la vía disciplinaria, por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se declara que **se rechaza** el recurso de queja interpuesto en contra de los miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago,



ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz y señora Elsa Barrientos Guerrero y fiscal judicial señora Macarena Troncoso López.

Acordado lo anterior **contra el voto** de la ministra **señora González** y de la abogada integrante **señora Rojas**, quienes estuvieron por acoger el presente recurso de queja y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia en alzada, manteniendo la vigencia de la decisión de primer grado que desestimó la excepción de pago parcial opuesta por el ejecutado, teniendo para ello en consideración lo siguiente:

1°.- Que, de la carpeta electrónica de la causa seguida ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT O-3502-20, así como la tramitada ante el Tribunal de Cobranza Laboral, C-5916-23, se desprenden los siguientes antecedentes:

La sentencia declarativa de primera instancia se dictó el 4 de octubre de 2021, acogiendo, entre otras acciones, la nulidad del despido; el recurso de nulidad contra esa decisión se falló por una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, acogiéndolo parcialmente el 2 de junio de 2023 y el recurso de unificación de jurisprudencia fue declarado inadmisibile por sentencia de 27 de julio de esa anualidad.

Ante el Segundo Juzgado Laboral de Santiago, compareció el empleador por presentación de 22 de agosto de 2023, dando cuenta del pago de lo adeudado, señalando que lo consignado por la suma de \$16.187.308, corresponde a la obligación pendiente hasta la fecha de muerte del trabajador acaecida el 30 de mayo de 2021. El tribunal del grado ordenó liquidar el crédito, lo que se hizo el 15 de septiembre de 2023, arrojando un saldo de \$30.402.134.

El empleador objetó esa liquidación argumentando que el trabajador falleció el 30 de mayo de 2021 y, por ende, al haber terminado la relación laboral en esa data era improcedente liquidar la obligación hasta septiembre de 2023. El tribunal por resolución de 4 de octubre desestimó la objeción señalando que la relación laboral terminó por despido por parte de la demandada el 31 de enero de 2020, invocando la causal del artículo 161 del Código del Trabajo y, en consecuencia, la muerte del trabajador ocurrida el 30 de mayo de 2021, no puede ser invocada para efectos de otorgar una segunda fecha de término a la vinculación laboral; resolución que se encuentra ejecutoriada. Luego, el tribunal ordenó certificar el incumplimiento de la obligación liquidada, lo cual se cumple el 13 de diciembre de 2023, remitiendo los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional.



Recibida la causa en el Tribunal de ejecución, con fecha 5 de enero de 2024, se requirió de pago al demandado por la suma de \$32.036.042, más reajustes e intereses. Con fecha 9 de enero de la misma anualidad, de oficio el tribunal, determinó que era procedente poner un límite al cobro de las remuneraciones post despido, fijando al efecto el 15 de septiembre de 2023, atendida la fecha en que se practicó liquidación del crédito en sede declarativa, en donde se estableció la deuda total actualizada; por ello fijó como fecha límite de cobro de remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y demás prestaciones que se devenguen derivadas del despido, respecto al actor Luis Viveros Viveros, el 15 de septiembre de 2023. El ejecutado interpuso reposición, la que fue desestimada por el Tribunal, argumentando que la liquidación del crédito perseguido en autos, de fecha 15 de septiembre de 2023, se encuentra firme o ejecutoriada, lo que el tribunal no puede alterar y solo es procedente aplicar los reajustes e intereses correspondientes a la deuda total actualizada desde dicha fecha en adelante.

El Tribunal de Cobranza liquidó nuevamente el crédito el 2 de enero de 2024, la que fue objetada por la ejecutada, oponiendo además la excepción de pago sobre la base de la transferencia realizada en la causa RIT O-3502-22, según lo expresado previamente, esto es, el fallecimiento del trabajador, la que fue rechazada por sentencia de 9 de mayo de 2024, la que siendo apelada por el ejecutado el tribunal de alzada la revocó por sentencia de 8 de enero de 2025, decisión impugnada a través del recurso de queja que se revisa.

2°.- Que en opinión de las disidentes, lo alegado en la excepción de pago acogida por el tribunal recurrido, corresponde a un asunto que incide directamente en la nulidad del despido, materia analizada por el tribunal declarativo laboral al desestimar la objeción a la liquidación del crédito, a través de la sentencia de 04 de octubre de 2023, la que está ejecutoriada y a su vez sirve de base para iniciar la ejecución de la deuda, requiriendo de pago al deudor por el saldo insoluto. Esta materia fue nuevamente revisada por el juzgado de cobranza y por resolución ejecutoriada de 9 de enero de 2024, fijó como fecha límite para el pago de las prestaciones derivadas de la nulidad del despido el 15 de septiembre de 2023, decisión coherente con lo resuelto previamente. En efecto, la citada sentencia interlocutoria, goza de autoridad de cosa juzgada por tratarse de un asunto promovido incidentalmente por el demandado y fallado por tribunal competente, estableciendo derechos permanentes en favor de una de las partes, lo cual se



justifica además en el mérito de la sentencia definitiva laboral de 4 de octubre de 2021, que declaró injustificado el despido de que fue objeto el trabajador el 31 de enero de 2020, acogió la acción de nulidad por no pago de cotizaciones previsionales y dispuso el pago de las prestaciones que indica.

3°.- Que la sentencia impugnada desconoce el efecto de resoluciones ejecutoriadas y al mismo tiempo incumple lo ordenado pagar por sentencie firme de conformidad a lo previsto en los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, obligación de carácter legal, cuyos presupuestos se tuvieron por acreditados en el fallo declarativo laboral. Por consiguiente, en opinión de las disidentes, los recurridos con su actuar incurren en falta o abuso grave por cuanto sin justificación racional se apartan del mérito del proceso, lo cual excede de la mera interpretación legal de la normativa aplicable, pues afecta la certeza que debe primar en el ordenamiento jurídico procesal.

Regístrese, comuníquese y archívense.

Rol N° 1.470-25.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Jessica González T., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la Abogada Integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, siete de abril de dos mil veinticinco.



En Santiago, a siete de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

